

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA TERCERA DE DECISION LABORAL

PROCESO	Ejecutivo conexo
DEMANDANTE	GABRIEL SALAZAR CADAVID
DEMANDADO	UGPP
PROCEDENCIA	Juzgado 12º Laboral del Cto. de Medellín
RADICADO	05001 3105 012 2014 01750 03
INSTANCIA	SEGUNDA
PROVIDENCIA	Auto interlocutorio Nro. 43 de 2022
TEMAS Y SUBTEMAS	Excepción de prescripción – costas procesales
DECISIÓN	Revoca

Medellín, veinticinco (25) de agosto de dos mil veintidós (2022)

En la fecha, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín, Sala Tercera de Decisión Laboral integrada por los Magistrados Martha Teresa Flórez Samudio, Orlando Antonio Gallo Isaza y como ponente Luz Amparo Gómez Aristizábal, procede a decidir el recurso de apelación formulado por el apoderado del ejecutante, contra el auto interlocutorio proferido el 18 de febrero de 2022 por el Juzgado Doce Laboral del Circuito, dentro del proceso coactivo promovido por **Gabriel Salazar Cadavid** en contra de **Unidad Administrativa de Gestion Profesional y Contribuciones Parafiscales de la Proteccion Social-UGPP**, código de radicado único nacional número 05001 3105 **012 2014 01750** 01.

Antecedentes

Para lo que interesa a esta instancia se tiene que el señor Gabriel Salazar Cadavid instauró proceso ejecutivo conexo a tramite ordinario, en contra de la UGPP solicitando se librara orden de apremio por \$18.000.000.oo, correspondientes a las costas procesales ordenadas en sentencia ordinaria

laboral del 21 de enero de 2005, dentro del proceso radicado 05001 3105 **012 2002 01054** 00, mas los intereses moratorios y las costas de la ejecución.

Atendiendo a la orden dada por esta Corporación el 14 de noviembre de 2019, el juzgado de conocimiento mediante auto del 19 de diciembre del mismo año, luego de haber sido reconstruida la sentencia objeto de recaudo, procedió a hacer el examen de fondo del caso y seguidamente libró mandamiento de pago en los siguientes términos:

“

PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO en contra de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES, U.G.P.P. y a favor del señor GABRIEL SALAZAR CADAVID identificado con la c. de c. No. 3.305.557, por el siguiente concepto y valor como capital:

\$18.000.000 como capital, correspondiente a las costas del proceso ordinario promovido contra CAJANAL.

”

Notificada la entidad demanda, propuso como excepciones, entre otras, la prescripción (Archivo 02. Expediente Digitalizado pág 136), argumentando:

“

PRESCRIPCIÓN:

Es el modo de extinguir obligaciones o acciones como sanción por no haberse desplegado actividad alguna por parte del interesado en las oportunidades consagradas en la norma, por lo que deberán tenerse en cuenta para efectos de declarar la prescripción de los derechos y del ejercicio de las acciones dentro del presente proceso, lo dispuesto en los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo, 151 del Código Procesal del Trabajo en concordancia con el 2512 y 2535 del Código Civil.

Solo en el caso que el despacho resolviera acceder a las pretensiones de la demandante, ruego sea tenida en cuenta la prescripción de todas las acciones y derechos que hubieren sufrido este fenómeno en razón del transcurso del tiempo.

Corrido el traslado de rigor la parte demandante no solicitó, ni aportó pruebas (archivo 04 pdf.).

El juzgado de conocimiento, el 18 de febrero del año en curso, procedió a resolver los medios defensivos propuestas, declarando probada la de prescripción, aduciendo lo siguiente:

"Frente a la "PRESCRIPCIÓN", corresponde a la extinción de los derechos que se surte por el transcurso del tiempo y se encuentra regulada normativamente en nuestro ordenamiento jurídico por los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo, 151 del Código de Procedimiento Laboral y 94 del Código General del Proceso.

La primera de las normas en cita, esto es, el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo establece como regla general para la caducidad de la acción laboral el término de tres (3) años contados desde que la obligación se hace exigible; por su parte el artículo 151 del Código de Procedimiento Laboral determina que el término de prescripción para las acciones que emanen de las leyes sociales es de tres (3) años contados desde que la obligación se hace exigible, y que dicho término se interrumpe por un lapso igual con el simple reclamo escrito del trabajador.

Respecto del tema en comento, lo cierto es que se presentaba discusión frente a la manera en que debía contabilizarse el término prescriptivo, no en cuanto a las normas aplicables, puesto que claramente corresponde al artículo 151 ibídem, sino con relación a la interrupción de los tres años.

En torno al tema se pronunció la H. Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Laboral, quien precisó que solamente podía tenerse como interrumpido el término de prescripción por una sola vez y con la reclamación escrita que se realiza en los términos del artículo 151 del C.P. del T. y de la S.S., sin que encuentre aplicación lo previsto por el artículo 6º ibídem, en la medida que se está en presencia de un derecho ya reconocido.

La providencia antes reseñada data del 3 de agosto de 2016, conocida con radicación 67.593 y ponencia del Dr. Jorge Luis Quiroz Alemán, donde se dijo:

"Respecto a la prosperidad de la excepción de prescripción, se encuentra que el señor Acevedo Gutiérrez acudió a la jurisdicción laboral a reclamar a través de proceso ejecutivo a continuación de un ordinario, el reconocimiento y pago de las costas judiciales reconocidas dentro del citado proceso ordinario, por lo tanto debía darse aplicación a las normas que sobre prescripción regule el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y dicho tema lo reglamenta el artículo 151 de esta disposición normativa cuando indica que "Las acciones que emanen de las leyes sociales prescribirán en tres años, que se contarán desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito (...) sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpirá la prescripción pero sólo por un lapso igual".

Corolario de lo anterior, para esta Colegiatura no es de recibo el argumento exhibido por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín al considerar que en el asunto de marras, el fenómeno prescriptivo no había operado, ante la omisión de la ejecutada de emitir pronunciamiento relacionado con el escrito presentado el 19 de diciembre de 2011, mediante el cual se solicitó el pago de los conceptos reconocidos dentro del proceso ordinario laboral radicado No 2009-697 al igual que el pago de las costas procesales. No tuvo en cuenta el juez plural que no debía acudir a las disposiciones referentes a la reclamación administrativa como requisito de procedibilidad para las acciones contenciosas y que aluden a la suspensión del término prescriptivo hasta tanto se resuelva la solicitud o transcurrido un mes sin que haya pronunciamiento de la entidad sobre el derecho reclamado, pues en el presente asunto no hay discusión sobre la existencia de derecho alguno por cuanto existió una obligación reconocida judicialmente el 27 de julio de 2011 la que a su vez quedó

ejecutoriada el 21 de noviembre de esa anualidad (fl. 74), debiendo entonces darse aplicación al contenido, en estricto rigor, del artículo 151 del estatuto procesal laboral que predica la prescripción trienal.

Así las cosas, advierte la Sala que al haber quedado en firme y legalmente ejecutoriado el auto que aprobó las costas procesales (fl. 74) el 21 de noviembre de 2011 (data en la cual fue notificado el auto), la reclamación se hizo el 19 de diciembre del mismo año, era desde esta última fecha que empezaba a correr el término de prescripción de tres (3) años, y, como quiera que la acción ejecutiva fue presentada el 18 de junio de 2015 (fls. 8 a 10), es decir, cuando se había superado ampliamente el término trienal de que trata el artículo 151 ibídem, ciertamente lo procedente era declarar la prosperidad del medio exceptivo formulado por la convocada a juicio."

En el proceso objeto de estudio el día de hoy, se encuentra que la liquidación de costas quedó firme el 17 de febrero de 2005, folio 11; y la reclamación administrativa para el pago de dicha obligación dirigida a la UGPP se presentó el 28 de enero del año 2009, tal y como quedó evidenciado en la resolución UGM del año 2011, en la cual se señala la fecha de reclamación realizada por el accionante(prueba obrante en expediente virtual, carpeta administrativa documento 62 – autos causante), lo que implica entonces que para el momento en que se radicó demanda ejecutiva laboral o solicitud de ejecución, esto es, para el 2 de julio de 2014 (Fl. 14), transcurrieron más de los tres (3) años de que trata el artículo 151 del C.P. del T. y de la S.S., lo que implica entonces que deba tenerse por probada la excepción de prescripción, lo que conduce entonces que deba disponerse el cese de la ejecución..."

Inconforme con ello, el apoderado del ejecutante interpuso el recurso de apelación, indicando:

"Me obliga interponer el recurso la imprecisión en el conteo del tiempo hecho por el Juzgado para declarar la prescripción en el presente proceso ejecutivo (conexo) al tenor del artículo 488 del C.sustantivo del Trabajo y articulo 151 del Código de Procedimiento Laboral, para que, el Sr .Juez Superior, con un mejor estudio procesal revoque la decisión y se ordene continuar con la ejecución.

En efecto, no existe el fenómeno prescriptivo mandado en las disposiciones citadas porque la evidencia procesal es clara en señalar que, en fecha 08 de Febrero de 2005 se declaró la ejecutoria de la sentencia proferida por ese juzgado contra la Caja de Previsión Social (Cajanal) hoy U.G.P P sucesora procesal por liquidación de aquella, en la cual se le condenó al pago de las costas procesales en cuantía de \$18.000.000.00.

Esa fecha de exigibilidad se traslada al 08 de Diciembre de 2005 y por disposición legal del C. Administrativo que la coloca 10 meses después de la ejecutoria del fallo.-. La exigibilidad de la obligación, entonces, es el 08 de Diciembre de 2005.-

Y, el 14 de Agosto de 2006 se presentó ante Cajanal UNA RECLAMACION DE PAGO previo el envío de los documentos, cuenta de cobro, que fue aprobada por Cajanal,.mediante auto número 0151 de 29 de Diciembre de 2008 (conforme a oficio 0AJ 102 de 21 de Enero de 2009).-

Dada la anterior reclamación existió la interrupción prescriptiva que conduce hasta el 14 de Agosto de 2009, fecha para la cual ya se encontraba Cajanal en LIQUIDACION, situación administrativa que data el 11 de Junio de 2009. Y, fecha desde la cual se suspendieron los términos de CADUCIDAD Y PRESCRIPCION, conforme reiterada

jurisprudencia del H.Consejo de Estado (Sec.- 2ª Suib-Sección B Rdo.25000234200020150160101).-

O, sea que, el marco tomado por el Juzgado para indicar probada la excepción de prescripción (del 17 de febrero de 2005 y el 28 de Enero de 2009) carece de sustento legal, razón por la cual en el presente proceso no operó la prescripción decretada.”

En virtud de lo anterior solicitó revocar la decisión inicial y en su lugar, ordenar seguir adelante con la ejecución.

Al encontrarlo debidamente interpuesto y sustentado, el juez de la causa concedió la alzada ante esta Corporación.

Del traslado para alegar hizo uso la apoderada judicial de la UGPP, quien luego de hacer una transcripción de disposiciones normativas y jurisprudenciales, señaló frente al caso concreto que al haber quedado en firme y legalmente ejecutoriado el auto que aprobó las costas procesales el 17 de febrero de 2005, la reclamación hacerse el 28 de enero del año 2009, y radicarse demanda ejecutiva laboral o solicitud de ejecución, el 2 de julio de 2014, ya se había superado ampliamente el término trienal de que trata el artículo 151 ibídem, luego lo procedente era declarar la prosperidad del medio exceptivo formulado, por lo que la excepción de prescripción estaba llamada a prosperar y en ese sentido debía confirmarse la decisión adoptada por el ad quo.

En orden a decidir, basten las siguientes,

Consideraciones

Teniendo en cuenta la providencia atacada y la inconformidad de la parte recurrente, habrá de establecerse si en el presente evento se encuentra configurada o no la excepción de prescripción, frente a la obligación de pago por costas procesales en el trámite ordinario r contra Cajanal (hoy

UGPP) , o si por el contrario, es posible seguir adelante con la acción ejecutiva, como lo considera el apelante.

Es importante advertir, que el objetivo del proceso ejecutivo es la satisfacción de una obligación que pese a la certeza y exigibilidad que la contiene, el obligado no se allana a cumplir, por ello, busca obtener la cancelación de la prestación insatisfecha.

El artículo **100 del CPTSS** dispone: *"será exigible ejecutivamente el cumplimiento de toda obligación originada en una relación de trabajo, que conste en acto o documento que provenga del deudor o de su causante o que emane de una decisión judicial o arbitral firme"*.

Y el **422 del CGP**, aplicable por remisión analógica al procedimiento laboral, establece que: *"Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial..."*

Bajo estas premisas, pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones contenidas en una sentencia de condena proferida por un juez o tribunal de cualquier jurisdicción.

De manera específica el artículo 151 del CPTYSS prevé: *"Las acciones que emanen de las leyes sociales prescribirán en tres años, que se contarán desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito (...) sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpirá la prescripción, pero sólo por un lapso igual"*.

De cara a la situación planteada en los antecedentes de este debate, y en relación con la prescripción, en providencia **STL1865-2022** Radicación

65726, del 16 de febrero de 2022, indicó la Sala Laboral de la H. Corte Suprema de justicia, lo siguiente:

“

Se debe resaltar, que no es cierto el argumento según el cual, figuras anexas a la prescripción, como la interrupción con todas sus aristas, sólo sea aplicable a obligaciones que no han sido reconocidas judicialmente, ya que eso va en contravía de ciertas estipulaciones procesales, que, analizadas y aplicadas en conjunto, descartan esa tesis.

*Por ejemplo, si se tiene en cuenta que, acorde con lo previsto en el numeral 2° del art 442 del CGP, aplicable al procedimiento del trabajo, por cuenta del art. 145 del CPT y de la SS, **el deudor tiene la posibilidad de alegar en su favor, entre ciertas excepciones la de prescripción, cuando se trata del cobro de obligaciones contenidas en una providencia, con mayor razón para el acreedor se activa el derecho de alegar otras figuras asociadas a ese régimen, con el fin de hacerle frente e impedir que se configure en ese campo, es decir, la posibilidad de alegar la interrupción, la suspensión o la renuncia de la prescripción.***

De manera que, en el régimen jurídico colombiano la prescripción extintiva aplica a todo tipo de obligaciones, llámense civiles, laborales, judiciales, incluso administrativas, con el fin de consolidar situaciones jurídicas concretas en consideración al transcurso del tiempo, concretamente liberar al deudor de la incertidumbre o indefinición de lo que se le pretende reclamar, y no estar atado “eternamente” a un llamado judicial y, en ese sentido, emerge igualmente la posibilidad del acreedor de valerse de las herramientas que trae el mismo ordenamiento jurídico, para desvirtuar o contrarrestar los efectos del fenómeno deletéreo, aún con una sentencia que declare el derecho en su favor y cuya satisfacción está a cargo del deudor.

Así las cosas, para el caso hay que centrarse en la figura anexa de la interrupción natural o civil de la prescripción, la cual, al tenor de lo previsto en el art. 2539 del Código Civil, se da cuando el deudor, en un acto voluntario e inequívoco, reconoce tácita o expresamente la obligación, o lo segundo, en virtud de demanda judicial.

*Tal institución jurídica ha sido aceptada en el campo del derecho del trabajo, según lo explicó la Sala en la sentencia CSJ SL9319-2016, de lo cual se resaltó el hecho de que **la interrupción natural del deudor** sea compatible con la interrupción natural del acreedor, **y que la primera pueda darse varias veces**, por cuanto el legislador no lo limita, en tanto que la segunda, por expresa disposición legal, sólo puede ejercerse una vez.*

Así, en cuanto a la compatibilidad de las dos figuras, la Corte adujo que:

«cada uno de estos mecanismos [interrupción natural del acreedor e interrupción natural del deudor] obedece a distintas situaciones, dado su origen, fuente normativa que los regula, requisitos para su exigencia, y la propia naturaleza, es dable jurídicamente sostener que pueden coexistir, son compatibles, esto es, no son excluyentes. Pensar diferente sería tanto como limitar las posibilidades de provocar la interrupción de la prescripción, y eso, a no dudarlo, menoscabaría los beneficios que otorgan las mencionadas figuras jurídicas, como que «el plazo principia a contarse de nuevo y el anterior desaparece». Dicho en breve, estos tipos de interrupción deben ser mirados con ojos diferentes.

Y, sobre el entendimiento de la interrupción del plazo de prescripción por "una sola vez", explicó que:

Como la interrupción de la prescripción del acreedor nace a la vida jurídica y produce sus efectos en forma autónoma e independiente de la interrupción natural del deudor, debe decirse que el concepto «por una sola vez» previsto en el art. 151 del CPT y SS, únicamente es predicable cuando la interrupción provenga del acreedor, mas no cuando emane de la persona que teniendo la posibilidad de obtener un beneficio con la prescripción, opta, en forma libre y voluntaria, por medio de un acto subjetivo, por reconocer al acreedor un derecho.

Para finalmente concluir, que:

si se interrumpe la prescripción de manera natural por el acreedor, en las condiciones antedichas, y también en forma natural por el deudor, para los efectos de comenzar a contar nuevamente el término se tendrá en consideración la última interrupción, bien por el acreedor o bien por el deudor; acto natural que, se insiste, debe producirse previamente a la consolidación del plazo de la prescripción."

(...)

Sobre las costas, aunque es cierto que el término prescriptivo se debe contabilizar desde la ejecutoria de la providencia que las aprueba, también se deberá examinar si la interesada interrumpió naturalmente la prescripción, y si en ello contribuyó el deudor, es decir, si aceptó expresamente la obligación o puso en evidencia alguna conducta de la cual se pueda inferir su reconocimiento, y a partir de allí, establecer o no un nuevo conteo de la prescripción."

La jurisprudencia del Consejo de Estado, en varias de sus decisiones en sede de tutela, ha explicado que frente a la Liquidación de Cajanal, debe tenerse en cuenta que los términos de prescripción y caducidad de las obligaciones a cargo de dicha entidad, se suspendieron durante el tiempo que duró su liquidación administrativa, sobre el particular, entre otras, en la sentencia con radicación 25000-23-37-000-2017-00705-01(23634) del 17 de mayo de 2018 se indicó:

"TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN Y DE CADUCIDAD DE OBLIGACIONES A CARGO DE LA CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL CAJANAL – Suspensión durante el tiempo que duró su liquidación administrativa / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE MEDIOS DE CONTROL CONTRA ACTOS ADMINISTRATIVOS EXPEDIDOS POR LA CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL CAJANAL DURANTE SU LIQUIDACIÓN – Suspensión hasta la finalización de la liquidación. Reiteración de jurisprudencia

En el expediente consta que la Resolución 3323 del 19 de marzo de 2013, mediante la cual finalizó la actuación administrativa, fue notificada el 1 de abril del mismo año. De acuerdo con lo anterior, el Tribunal Administrativo de

*Cundinamarca consideró que el término de caducidad inició el día siguiente (2 de abril de 2013), conforme con lo ordena el literal d) del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011. **No obstante lo anterior, el a quo no tuvo en cuenta que el caso bajo examen presenta una situación particular: CAJANAL EICE estaba en liquidación al momento en que fue proferido el acto administrativo acusado, según lo ordenó el Decreto 2196 de 2009. Este hecho tiene una incidencia en la norma aplicable al caso concreto porque, como lo aclaró la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, el término de caducidad sólo podría iniciar con la finalización del procedimiento de liquidación de CAJANAL EICE, por los siguientes motivos:***

*"Uno de los sustentos normativos del precitado Decreto 2196 de 2009 lo fue el Decreto-Ley 254 de 2000, modificado por la Ley 1105 de 2006, el cual, en el inciso segundo de su artículo 1º, respecto de su ámbito de aplicación, consagró **'en lo no previsto en el presente decreto, deberán aplicarse, en lo pertinente, las disposiciones del estatuto orgánico del sistema financiero y del Código de Comercio sobre liquidación, en cuanto sean compatibles con la naturaleza de la entidad Para esos efectos se expidió la Ley 550 de 1999, aplicable a todas las entidades de carácter privado, público o de economía mixta que ejerzan alguna actividad financiera y de ahorro y crédito, consagrando en el inciso segundo del artículo 14 que '...Durante la negociación del acuerdo se suspende el término de prescripción y no opera la caducidad de las acciones respecto de los créditos contra el empresario'**. (subraya fuera de texto).*

En tales condiciones, por fuerza de la remisión normativa contenida en el inciso segundo del artículo 1º del Decreto Ley 254 de 2000, los términos de prescripción y de caducidad de las obligaciones a cargo de la extinta Caja Nacional de Previsión Social – CAJANAL no corrieron durante el tiempo que transcurrió en su liquidación administrativo que, según lo afirmado en la demanda, concluyó el 11 de junio de 2013". Debe ponerse de presente que esta postura fue acogida por esta Sala en sentencia de tutela del 16 de noviembre de 2016..."

En la misma línea, en sentencia con radicación 11001-03-15-000-2021-03608-00(AC) del 15 de julio del año 2021, expuso:

"Para soportar la anterior posición, la Subsección precisó que no es viable generar una afectación a los favorecidos con un fallo judicial, debido a la desorganización de la administración y la ausencia de reglas inequívocas sobre la forma de exigir la efectividad de la condena. En esa línea de ideas, en la providencia en mención se crearon unas subreglas para determinar cómo opera la suspensión ... en cada caso concreto, estas son:

«[...] la caducidad de medio de control se suspenderá sólo a partir del momento en que inició el periodo liquidatorio de CAJANAL EICE y se reactivará:

a- El 8 de noviembre de 2011 si la petición de cumplimiento se realizó y competía atenderla a la UGPP de acuerdo con el Decreto 4269 de 2011 o,

*b- Para aquellas obligaciones cuya petición de cumplimiento correspondía atender a CAJANAL en liquidación, conforme el mismo decreto, **la reactivación será el 12 de junio de 2013, día siguiente a la fecha en la que culminó la liquidación de aquella entidad y por ende la obligación podía perseguirse en cabeza de la UGPP [...]**».*

Siendo así, el juez debe determinar cuándo se presentó la petición de cumplimiento, esto es, si fue antes o después del 8 de noviembre de 2011, fecha en que se distribuyeron las competencias entre Cajanal en liquidación y la UGPP, mediante el Decreto 4269 de 2011”

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, en relación con el asunto discutido se advierte el siguiente trámite:

ACTUACIÓN	FECHA	UBICACION
Mediante auto del 8 de febrero de 2005 se declara en firme y legalmente ejecutoriada la sentencia proferida el 21 de enero del mismo año, y se fijan costas a cargo de Cajanal en \$18.000.000.oo haciendo su respectiva liquidación	08/02/2005	Archivo02 Expediente pdf.pág 10 y 11
Auto aprueba liquidación costas 1º instancia del 17 de febrero de 2005 notificado por estados #28 del 18 de febrero del mismo año	18/02/2005	Archivo02 Expediente pdf 12
Ejecutoria auto que aprueba liquidación costas 1º instancia	24/02/2005	Archivo02 Expediente pdf 12
Resolución 3676 del 29 de junio de 2005, notificada el 19 de agosto de 2005. Da cumplimiento a la sentencia frente al reajuste dispuesto por el juez, y ordena liquidar intereses. No se pagan de costas.	19/08/2005	Carpeta03 Expediente Administrativo Archivo pdf.42
<u>Solicitud por el pago de costas el 06 de agosto de 2007</u>	06/08/2007	Carpeta03 Expediente Administrativo Archivo pdf.61
Dando contestación a la solicitud anterior, Cajanal mediante auto No. 0151 del 29 de diciembre de 2008 reconoce las costas adeudadas	29/12/2008	Archivo02 Expediente pdf.pág 18
Mediante oficio del 21 de enero de 2009 requiere al interesado para que aporte documentación, la cual se aprecia fue debidamente remitida.	21/01/2009	Archivo02 Expediente pdf.pág 18
Comunicación interna del 12 de agosto de 2011 remitida por Buen futuro a la jefe jurídica de Cajanal en liquidación enviando el expediente del señor Salazar, informado que en él obran las peticiones por el pago de costas del 06 de agosto de 2007, reiterada el 28 de enero de 2009 y el 25 de agosto de 2010.	12/08/2011	Archivo03 Expediente Administrativo pdf.61
Radicación ejecutivo por costas del ordinario y pago de intereses	01/07/2014	Archivo02 Expediente pdf.pág 17

Por lo que, acorde con la jurisprudencia reseñada, y según el detalle de las pruebas relacionadas anteriormente, queda claro que, la obligación se hizo

exigible una vez quedó ejecutoriada la providencia que fijó las costas, (24/02/2005), luego para ejercer la acción ejecutiva laboral el interesado contaba con tres años, los cuales en principio corrían hasta el **24/05/2008**; previo a la configuración de dicho plazo prescriptivo, el acreedor a través de su apoderado, interrumpió tal término por una sola vez, **el 6 de agosto de 2007**, cuando solicitó el pago de las costas adeudadas, pues si bien a través de la Resolución 3676 del 29 de junio de 2005, notificada el 19 de agosto del mismo año se reconoció y ordenó el pago de lo dispuesto en la sentencia judicial, no se canceló dicho concepto, por lo cual, el interesado tenía hasta **el 6 de agosto de 2010** para ejercer la acción ejecutiva. Sin embargo, como lo explicó la jurisprudencia especializada antes reseñada, **con ocasión a la liquidación de Cajanal, los términos de prescripción se suspendieron a partir del 12 de junio de 2009, y para aquellas obligaciones cuya petición de cumplimiento se dio antes del 8 de noviembre de 2011, correspondiendo atenderlas a CAJANAL en liquidación (como es este caso), la reactivación sería el 12 de junio de 2013, día siguiente a la fecha en la que culminó la liquidación de aquella entidad y por ende la obligación podía perseguirse en cabeza de la UGPP**, por lo cual, desde el 6 de agosto de 2007 al 11 de junio de 2009, ya se encontraba transcurrido un término de 1 año, 10 meses y 5 días, sin que continuara corriendo el plazo por la suspensión referida, **quedando pendiente 1 año, 1 mes y 25 días para completar el término trienal**, los cuales debían contabilizarse a partir del 12 de junio de 2013, **y en esa medida el plazo de los tres años para demandar finiquitó el 6 de agosto de 2014**, y como la solicitud de ejecución se radicó **el 1 de julio del mismo año según sello de la oficina judicial** (Archivo02 Expediente pdf.pág 17), se encontraba en tiempo, para ejercer la acción judicial y para evitar la consumación de la prescripción, por lo que debe **revocarse la providencia del 18 de febrero de 2022** y ordenarse la continuidad del trámite ejecutivo, sin lugar a imponer condena en costas al haber prosperado el recurso interpuesto.

En mérito de lo expuesto, **la Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín,**

Resuelve:

Revocar el auto del 25 de febrero de 2022, proferido por el Juzgado Doce Laboral del Circuito dentro del proceso ejecutivo promovido por **Gabriel Salazar Cadavid** en contra de la **UGPP**, para en su lugar, ordenar su continuidad.

Sin costas en esta instancia al haber prosperado el recurso interpuesto.

Ejecutoriada esta decisión, por secretaria devuélvase la actuación digitalizada al juzgado de origen para que continúe con el trámite pertinente.

Lo resuelto se notifica a las partes por **estados virtuales**, en virtud de lo dispuesto en artículo 295 C.G. del P, en concordancia con el artículo 9 de la Ley 2213 de 2022.

Los magistrados, (firmas escaneadas)


LUZ AMPARO GÓMEZ ABISTIZABAL
Magistrada


MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
Magistrada


ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA
Magistrado

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN –
SALA LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por
estados No. 151 del 26 de agosto de 2022
consultable aquí:
<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/125>